

ANTECEDENTES PARA UNA REFORMA  
DE LA LEY DE EDUCACIÓN ~~SUPERIOR~~ UNIVERSITARIA  
(desde la vigente Ley)

La vigente Ley de Universidades presenta las contradicciones y vacíos que la coyuntura ideológica, vigente para su aprobación, posibilitó. El impulso inicial, de la doctrina del Estado Docente, que impulsaba el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y que había rendido los frutos extraordinarios que alcanzó la consolidación de una masiva y cualificada educación; a todos los niveles, se fueron debilitando con la creciente influencia de la derecha católica y la actitud de la extrema izquierda que, dogmáticamente, se aferraba al determinismo económico, lo que debilitaba la resonancia popular, de las múltiples implicaciones, de esta revolucionaria política para la coyuntura histórica que, para ese momento, vivió Venezuela.

Numerosos aspectos son fundamentales interpretar en el recorrido de las actividades universitarias al amparo de la vigente Ley de Universidades, la primera se refiere a su nacimiento y aprobación, período durante el cual se le hicieron importantes observaciones; ya que se consideraba que no recogía, ni expresaba claramente la verdadera significación de la autonomía universitaria, en realidad se considero a la vigente Ley de Universidades una ley chucuta, que no dejaba claramente establecido el alcance ni delimitaba las áreas de la autonomía universitaria; la cual, para ese entonces, intentaba recoger y profundizar los más importantes objetivos de la famosa reforma de Córdoba, cuna del concepto de autonomía universitaria en América Latina.

Aun con este sesgo, de la Ley de Universidades en el alcance de la autonomía, la misma fue brutal y sangrientamente cercenada con la intervención militar y política durante el primer gobierno de Rafael Caldera, con el allanamiento de la Universidad Central; que se caracterizó por lo cruento del mismo.

Este es el mismo Caldera que durante su segundo gobierno, aplicando la política neoliberal; que critico durante el proceso electoral, cerco económicamente a las universidades; a tal punto que en los últimos años de su periodo de gobierno, los universitarios, incluidos los profesores; no

sabían cuando cobrarían su salario, creándose tal grado de pesimismo en la mentalidad universitaria, que las deudas, que este gobierno hoy esta honrando, desde hace más de tres años, era considerada, para aquel entonces, como la isla de la fantasía, es decir sueños vanos de quienes se consideraban incapaces de reclamar lo que les era justo.

No quiero extenderme en los allanamientos, ni las violaciones de los recintos universitarios durante la vigente ley, pero como consecuencia de los mismos, la reforma puntual que se realice a la Ley de Universidades debe dejar claramente establecido el alcance y las áreas que deberá proteger la autonomía universitaria, estableciendo también las responsabilidades que la violación de misma implique y las sanciones a que diera lugar, tanto para funcionarios externos como para los que desde adentro la utilicen vilmente.

Otro aspecto importante, y que se desprende de la conducta asumida por el segundo gobierno de Caldera, es el relacionado con el financiamiento universitario y la matrícula de las mismas.

Consideramos que la política de inclusión social del gobierno debe romper con el concepto de cupo universitario, y crear una política de ingreso universitario, política que a su vez debe despojarse de todo vestigio y/o concepción de mercado, así mismo debe romper con la incompetente excusa administrativa que relaciona o vincula la variable calidad con un bajo número de estudiantes.

Fue frecuente y aun lo es, la justificación del deterioro de la calidad de la enseñanza universitaria por el alto número de estudiantes que aspiraban a su ingreso en las universidades; eximiendo a las autoridades o responsables universitarios de su compromiso con la utilización eficiente y efectiva de los recursos financieros de las universidades, para brindarle a la juventud venezolana una oportunidad de ejercer el derecho humano y constitucional al estudio.

Vale decir, debe la reforma de la Ley de Universidades establecer los recursos necesarios y suficientes para garantizar el derecho del ingreso de la juventud venezolana, si es su voluntad, a las universidades.

En consecuencia la asignación financiera deberá responder a este criterio, pero este derecho al ingreso universitario debe interpretarse como derecho al estudio universitario y, consecuentemente, garantizarle al



joven durante su estadía en la universidad los recursos y medios necesarios y suficientes para un adecuado o excelente rendimiento, porque no basta con poder ingresar a la universidad debe también garantizarse las condiciones de igualdad para el ejercicio del desarrollo de la inteligencia y el conocimiento, es decir adseso a la bibliografía, salones y espacios para la docencia e investigación, laboratorios y salones de computación, etc..

El otro aspecto a considerar puntualmente en la Ley de Universidades lo representa el de su profundización democrática ampliando los conceptos y procesos de elección de autoridades tanto de las estructuras universitarias como de las para-universitaria, y en consecuencia, revisarse la existencia de las comisiones electorales, que como la historia lo ha demostrado, dependen de los caprichos de las autoridades que directa o a través de los consejos universitarios pueden y ejercen presiones y controles sobre las comisiones electorales, este organismo, tal como se consagra en la constitución deberá ser un poder independiente y soberano al interior de las universidades y esto deberá recogerlo la reforma puntual.

Otro ítem de la democratización lo representa la necesidad, y así ha quedado demostrado históricamente, de diferenciar la autoridad ejecutiva de la autoridad legislativa y fiscalizadora en las universidades, no puede continuarse con el modelo en la que las autoridades que programan y ejecutan los presupuestos y objetivos de la universidad, es decir Rectores, Vice-rectores y Decanos conforman mayoritariamente el cuerpo legislativo o consejo universitario, en el cual han terminado por comprar y darse el vuelto.

En otras palabras es indispensable una mayor participación, control y fiscalización en el ejercicio de la ejecución presupuestaria de las universidades por parte de toda la comunidad que la integra.

De igual forma que no existe un poder o cuerpo contralor en la estructura universitaria, es secundaria la visión democrática que posee la vigente ley; así como la participación de los estudiantes representa una absoluta y franca minoría, que nada tienen que ver con lo sustancial del proceso democrático y participativo universitario, sostiene además, un criterio excluyente, al guardar silencio en relación a la participación del personal administrativo y de obreros.

Otro elemento puntual que debe ser considerado en la reforma de la Ley de Universidades, lo representan los aspectos concernientes a la administración del patrimonio universitario, el cual hemos visto en algunos casos, especialmente en el de LUZ, como se han ido perdiendo espacios de los terrenos universitarios, concedidos entregados, permutados o vendidos, a nuestro juicio ilegalmente, pero igualmente ejecutados, en actividades que no son de uso directo, ni indirecto de actividades docentes de investigación o extensión, confundiendo necesidades con objetivos, este aspecto también debe ser considerado en relación a las eufemísticas universidades privadas, ante lo que fue hace unos años el bochornoso y penal caso de la universidad Santa María, por efecto de una sucesión.

De tal forma que la autonomía universitaria se basa esencial y fundamentalmente en el derecho y la legitimidad de las leyes y la viola no tan solo el funcionario externo que pretenda vulnerarla, sino y en mayor grado, los funcionarios o miembros de la comunidad universitaria que vulneran y desconocen la estructura legal que garantiza la propia autonomía. La autonomía universitaria privilegio de civilización, se sustenta en el estricto respeto de sus miembros al ordenamiento jurídico que la consagra y legitima, no es espacio para la fechoría, ni la popular viveza criolla, quien en las universidades viola o se aprovecha del derecho de los estudiantes, profesores o cualquier otro miembro o ciudadano viola la autonomía y expone la libertad universitaria, es el verdadero enemigo, los demás son simples adversarios.

Otro criterio que debe ser consagrado y establecido en la reforma puntual de la Ley de Universidades, aparte de cómo ya dije en relación a la autonomía, pero quiero redundar para dejarlo claro. Consagrando el mejor definido derecho de autonomía, establecer los mecanismos que de manera efectiva y eficiente obliguen a las autoridades y funcionarios universitarios al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sea en su ámbito municipal, estatal, administrativo o de cualquier otra jurisdicción, sobre todo, el constitucional.

Pero como dijimos al principio la ley de Universidades posee, de manera intencional, una redacción de espacios interpretativos que han permitido una abierta interpretación de absoluta libertad administrativa-propietaria, de las universidades privadas, por parte de sus "promotores",



actuando al margen del reconocido derecho del estado de tutelar la educación a todos sus niveles, máximo aún con la vigencia de la Constitución Bolivariana.

En el actual proceso existe un imperativo constitucional que obliga a la adecuación de las leyes a las características fundamentales y esenciales de la Constitución Bolivariana, las que resumiendo podemos caracterizar como; participativa, protagónica y esencialmente democrática.

Todas las leyes deben adecuarse a los principios constitucionales de participación popular; así mismo a reformar la legitimidad de cualquier proceso u organismo que no emane de la voluntad democrática del pueblo, con formas y procesos que garanticen, no tan solo la debida participación sino la calidad de la participación, en este sentido, las leyes relativas a la educación, la cultura, el deporte, etc. no solo deben ampliar y consolidar procesos y mecanismos de participación directa del pueblo, sino que deben crear procesos que a su vez eduquen y mejoren la condiciones y la calidad de esta participación.

En el caso concreto que nos atañe, la vigente Ley de Universidades deberemos apuntar al Título IV, de las Universidades Privadas y observar que en el artículo 177, se establece que: "las universidades privadas tendrán un personal directivo similar al asignado por la presente Ley a las Universidades Nacionales, el cual deberá llenar los requisitos exigidos en los artículos 28, 64 y 72 (estos artículos se refieren a las características que deberán reunir los posibles candidatos a autoridades, decanos y directores).

Al analizar este artículo 177, a la luz de las exigencias de la Constitución Bolivariana en sus artículos;

#### **Artículo 2. °**

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

#### **Artículo 3. °**

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la



prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.

#### **Artículo 7.º**

La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.

podemos establecer que lo concerniente al término similar, este se refiere igual o análogo del personal directivo, por lo que debemos concluir que se refiere a su origen y legitimidad democrática, ya que los artículos mencionados, como dijimos, apuntan a las condiciones básicas para ser postulados como candidatos al proceso de la elección, en consecuencia el artículo 177, en su ajuste interpretativo a la Constitución Bolivariana, establece la posibilidad de la elección de las autoridades y decanos en las universidades privadas, pero más claro aún y confirmando esta tesis este el artículo 179, que establece que las Universidades Privadas y sus organismos tendrán la misma estructura académica que la de las Universidades Nacionales, salvo en lo establecido en esta Ley y lo que reglamente el Consejo Nacional de Universidades.

Como hemos visto la esencia democrática es una tarea educativa y privativa en la formación de la personalidad de la juventud.

El otro elemento a resaltar es la conformación de los organismos académicos estudiantiles, así como los de cogobierno en las Universidades Privadas, en consecuencia deberán elegirse en las Universidades Privadas los respectivos centros de estudiantes, representantes estudiantiles a gobierno, cogobierno.

Este artículo 179, que aparece enunciado y que hoy debe actualizarse su interpretación, por lo menos a la luz del imperio de la Constitución Bolivariana, nos obliga a concluir que las Universidades Privadas deberán cumplir con la creación del escalafón universitario que rige a todo el sector de las universidades públicas nacionales sean autónomas, experimentales o colegios universitarios, y en consecuencia, deberán crear el escalafón de profesores e investigadores de la estructura académica, de conformidad con la vigente ley, en profesores instructores, asistentes, agregados, asociados y titular. Todo esto redundará en la



calidad y condiciones de trabajo de un personal que ha alcanzado altos niveles académicos.

Los Derechos humanos y la reforma de la Ley de Educación Superior.

**Artículo 20. °**

Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social.

**Artículo 23. °**

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

**Artículo 26 °**

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

En consecuencia la ley dispondrá lo necesario para que las violaciones en el campo de la educación universitaria y de cuarto y quinto nivel, así como todo lo correspondiente a los procesos administrativos tengan una vía expedita, efectiva y eficiente en los tribunales, tal como lo establece la constitución.

**Artículo 27 °**

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier

#### Capítulo IV, de los Derechos, Políticos y del Referendo Popular,

##### **Artículo 62. °**

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Pese a la definición de privada que se le otorga en la constitución y la ley, en realidad nos estamos refiriendo a un hecho del dominio público, el referente privado es un gazapo que se utilizó intencionalmente para dejar, pese a las restricciones que la ley y la constitución bolivariana imponen, justamente, a esta particular actividad que se consagra como derecho fundamental del hombre, la sensación de propiedad que algunos promotores han utilizado para abusar de miles de jóvenes que se encuentran en el subsistema universitario de iniciativa social y yo diría hoy día comunal.

En consecuencia la reforma de la ley consagrará a su más alto nivel la democracia y la participación protagónica de todos los miembros de la comunidad universitaria, reforzando y creando a tal efecto los organismos necesarios para una eficiente gestión y una activa fiscalización de contraloría social.

Así como de los procedimientos electorales, por que debemos recordar que no solo las autoridades manejan recursos, son electos y asumen responsabilidades en el desarrollo de la actividad universitaria, los organismos estudiantiles y gremiales, también están sujetos a estas características, en consecuencias estarán sujetas a estos escrutinios, las universidades privadas estarán por igual sujetas a este proceso de democratización participativa y protagónica, estableciéndose la separación funcional y autonómica entre la universidad y el ente promotor.



## RESUMEN.

El **Artículo 102 °**, expresa,

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley.

Este artículo, a mi conocimiento define y sustenta, por si solo todo el proceso y andamiaje de reforma que apunta a la democratización, participativa y protagónica de las universidades privadas y en la creación de su estructura similar a las autónomas, estas a su vez serán más democratizadas y tendrán nuevos organismos de control, así como más claras definiciones de manejo del patrimonio y de los recursos.

Diferenciando la acción administrativa de la acción legislativa y de control, así mismo el presupuesto se otorgará según un índice de calidad docente (en el que estará conceptualmente incluida la investigación, ya que no existe docencia universitaria, a ningún nivel, sin investigación, pero sin la separación elitista que existe hoy), de calidad de permanencia de los estudiantes y el número de estudiantes, matrícula, que se establecerá según un determinado número de estudiantes por profesor, sean cualesquiera su figura laboral.

Ninguna actividad, permitirá exceptuar la docencia a ningún profesor, incluida la condición de Rector, quien no ejerza la docencia y cumpla con un horario mínimo, según sea su dedicación, no podrá cobrar salario alguno.

En el caso de funciones académicas que requieren tiempos especiales, se podrá usar la figura del profesor asociado que dicte la clase, pero el total

de las mismas no podrá exceder o ser igual al 50% de la carga horaria por sección. Los docentes tendrán en consecuencia prohibido ejercer cualquier cargo administrativo dentro de las universidades.

En caso de ejercerlo perderá automáticamente su condición de personal docente y deberá cumplir los requisitos que el cargo administrativo requiera, es decir su transferencia no será automática, tal como no lo es ni será la vía contraria, es decir que un empleado administrativo pase a las condiciones de docente de manera automática sin cumplir con los requisitos de ingreso docente.

Estas condiciones regirán para las universidades públicas como para las de iniciativa social, hoy mal llamadas privadas.

**Artículo 106. °**

Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste.

Este artículo y su expresión estricta, es la que nos da el derecho a la supervisión de las fundaciones y su actuación económicas, considerando que la aplicación de la ley de funcionarios públicos, por el carácter de fundación sin fines de lucro, es más que justificada, lo que imposibilita la contratación de familiares de consanguinidad y filiación por lo menos hasta el tercer grado con las fundaciones y/o universidades privadas.

**LEY DE UNIVERSIDADES**

**Artículo 177.** Las Universidades Privadas tendrán un personal directivo similar al asignado por la presente Ley a las Universidades Nacionales, el cual deberá llenar los requisitos exigidos en los Artículos 28, 64 y 72.

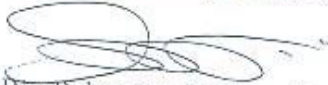
**Artículo 179.** Las Universidades Privadas y sus organismos tendrá la misma estructura académica que la de las Universidades Nacionales, salvo en lo establecido en esta Ley y lo que reglamente el Consejo Nacional de Universidades.



**Artículo 181.** Las disposiciones de la presente Ley relativas al régimen de la enseñanza y de los exámenes se aplicarán a las Universidades Privadas.

**Artículo 183.** El Estado ejercerá la inspección de las Universidades Privadas en la forma que al efecto disponga el Ejecutivo Nacional, el cual podrá revocar la autorización de cualquier Universidad Privada, o suspender su funcionamiento o el de cualquiera de sus dependencias cuando en ella no se cumplan las disposiciones legales o reglamentarias que les sean aplicables.

Estos artículos cuyo espíritu fueron recogidos anteriormente en mi exposición, me permito citarlos, para establecer que la reforma de la ley de universidades bajo la exigencias de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no hará más que definir y ampliar los derechos democráticos del venezolano en relación a la educación superior, así como de los miembros de la comunidad universitaria, siempre priorizando la calidad de la enseñanza, que ineludiblemente tendrá al profesor, o como gustaba al Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa que lo llamasen, ante los calificativos lisonjeros de profesor o doctor, **maestro**; como fundamento de toda acción que implique las mejores y más amplias condiciones de trabajo y formación y todos los recursos necesarios a su alcance para el éxito de su sagrada misión la formación científica y tecnológica de la juventud venezolana.

  
Dip. Roberto A. Quintero V.  
Presidente de la Subcomisión  
Permanente de Educación Superior



Caracas, 9 de noviembre de 2010

**APUNTES PARA LA REFORMA DE LA LEY DE UNIVERSIDADES  
(Para avanzar al Socialismo del siglo XXI).**

**INTRODUCCIÓN.**

Los diez años de Gobierno Bolivariano han transformado el País y facilitado grandes y significativos cambios, que han implicado profundas reinterpretaciones del papel del Pueblo en su papel protagónico y reivindicado el carácter y la conciencia de éste, mostrándose como un maduro conglomerado de protagonistas capaces de luchar por la democracia participativa e incluyente a la cual se sienten, con legítimo orgullo, merecedores y capaces de hacerla avanzar.

Los enemigos de este proceso de establecimiento de una verdadera democracia socialista, participativa, incluyente y protagónica no son tan solo las concubinas del poder de la IV República, es también la particular cultura que dentro y en las inmediaciones de los organismos del Estado se desarrollaron y que representan, en conciencia y teoría, la particular visión de exclusión, burocratismo e insensibilidad hacia los objetivos de un Estado Moderno, como el que nos es, históricamente, obligación construir y desarrollar.

La visión del Presidente Chávez, le permitió la visualización práctica de las Misiones, como una forma organizativa novedosa y efectiva para, rápidamente, llevar hasta a las grandes masas de la población excluida la acción del Gobierno, pero también fue, y es, una manifiesta afirmación de la inoperancia, rigidez e ineficiencia de la estructura del Estado a todos sus niveles, especialmente los que se relacionan con los derechos fundamentales y la calidad de vida, que además representan los principales servicios coadyuvantes del desarrollo social y económico, como son la salud, educación y la ciencia y tecnología, estas misiones deberán servir para el proceso de transformación radical de los Ministerios tradicionales hacia los Ministerios del Poder Popular, de manera tal que más adelante surjan las verdaderas organizaciones que representen las motivaciones y objetivos del Socialismo a construir, única garantía de verdadera democracia protagónica y participativa.





## EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA  
SUPERIOR

Este es una de las creaciones del proceso revolucionario que se inicia con el Gobierno del Presidente Chávez, es una clara manifestación de la concepción del papel de la educación superior en el desarrollo socioeconómico del país, pero desde una clara concepción humanista y democrática, de inclusión social, en primer término y de promoción de una verdadera calidad de la enseñanza educativa universitaria que abra las puertas a un proceso de transformación de la actividad integral de la sociedad venezolana, desde la educación básica, pasando por la administración pública y privada y en el desarrollo de un modelo económico de inclusión social y catalizador de las potencialidades científicas y tecnológicas que requiere la elevación de la calidad de vida del venezolano, es esto el significado estratégico de la educación superior para profundizar y llevar a nuevos niveles las políticas de inclusión social, comenzando con Barrio Adentro, Misión Sucre y Ribas, pero también, incluye los procesos que requieren la aplicación de la Constitución y las Leyes de Consejos Comunales y de Planificación, derechos estos que requieren de la urgente formación y capacitación.

### **Inventamos o Herramos.**

Esta celebre frase del Maestro Simón Rodríguez es hoy más que pertinente cuando impulsamos transformaciones a fondo y nos tropezamos con una cruda realidad, la educación como estructura es por definición reacia al cambio, cuando no reaccionaria, en este sentido cualquier cambio en este campo, dentro del marco jurídico y legal, debe venir por la vía de la reinterpretación, ampliación o reorganización de funciones de los elementos y componentes de la estructura actual.

### **ALGUNOS PASOS HACIA LA REVOLUCIÓN.**

- Es indispensable determinar el anacronismo del Consejo Nacional de Universidades, en tal sentido debe procederse a la reforma o

7

reinterpretación de su articulado jurídico, comenzando con la presencia de los rectores de las Universidades Privadas, los cuales deben ser reducidos a una representación de uno o dos miembros por todas las universidades privadas, obligando de esta manera a una necesaria elección de los mismos e introduciendo una dinámica democrática en las mismas, con las consecuencias previsibles en tal caso.

- Aplicación de la Ley de Universidades en términos precisos a las Universidades Privadas, las cuales se mantienen al margen de la ley y no poseen un escalafón universitario, ni cumplen con los requisitos de ley en la designación de sus autoridades, los "propietarios", se erigen en sus autoridades, caso URU, de Maracaibo., esta dinámica crearía un proceso de mejoramiento en los términos laborales de muchos profesionales que ejercen la docencia sin ninguna garantía ni estabilidad y consecuentemente la calidad de la enseñanza privada.

- Desarrollo de una política de representación verdadera y efectiva del ministerio en las Universidades Públicas Autónomas, hasta ahora el representante del Ministerio es una presencia en los Consejos Universitarios, sin conexión con las políticas nacionales, así, esta representación se reduce al empuje y las necesidades de los designados, es necesario cambiar esta situación para lo cual, el Representante del Ministerio deberá constituir una oficina en la que se promoverá y apoyaran las iniciativas gubernamentales en materia de educación <sup>reintegrar</sup> superior así como se garantizará el acceso de los miembros de la comunidad universitaria a los diferentes niveles del ministerio de educación superior según sea su pertinencia, para tales fines esta oficina promoverá la creación y participación de los consejos comunales en la defensa del derecho al estudio universitario de la juventud venezolana, abrirá la discusión pública de los presupuestos de las universidades con la comunidad, así como su ejecución, hará público los record de asistencia y de trabajos de investigación de los docentes e investigadores de las Universidades, promoverá la discusión pública de la relación Profesores-Investigadores y alumnos buscando equilibrar esta relación que nos atrevemos a afirmar que en todas las universidades autónomas no es mayor de 15 estudiantes por profesor, aclarando que este promedio oculta una realidad aún más crítica ya que existen Facultades con una



7

relación de 35 a 45 alumnos por profesor y otras de 2 a 5 alumnos por profesor, mostrando un gran desequilibrio y una capacidad ociosa de las Universidades, otro elemento a rescatar por parte de los representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior es la orientación y priorización de la utilización del patrimonio universitario, que se ha confiscado por parte de las Autoridades Universitarias y orientado a usos contrarios a su propiedad social, en casos específicos se han de hecho, más no de derecho, privatizados, sin que haya habido una respuesta de los organismos competentes, especialmente del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior *Universitaria*.

#### APUNTES ESPECÍFICOS

- 1.- Proposición para crear el sistema nacional de educación superior *Universitaria* primer paso, eliminar el término de educación privada al sistema de educación pago por él de educación de iniciativa social sin fines de lucro.
- 2.- En este sub-sistema de educación de iniciativa social sin fines de lucro se diferenciarán claramente la organización (Fundación) de creación de la Universidad y la organización académico administrativa de la Universidad como tal. Dejándose expresamente establecido que los miembros directivos de una no podrán ejercer cargos directivos en la otra.
- 3.- El subsistema de educación de iniciativa social sin fines de lucro, haciendo hincapié en esta última y altruista definición, homologará las normas de la administración pública especialmente en lo concerniente al impedimento explícito de cualquier forma de relación económico, comercial y/o de servicios entre los miembros directivos de la fundación y estructura universitaria (autoridades y/o administradores) con familiares por lo menos de hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Esta prohibición deberá incluir a las universidades, tecnológicos y colegios universitarios nacionales.
- 4.- Igualar el escalafón docente de las universidades de iniciativa social sin fines de lucro al de las universidades públicas nacionales, así como su estructura de dirección u organización académica estudiantil y de trabajadores, creándose los consejos de escuelas, consejos de facultades, consejos universitarios, asambleas universitarias, claustros y asambleas

de facultades, en todas con representación de profesores estudiantes, empleados y obreros.

5.- Ninguna autoridad, de las universidades de iniciativa social sin fines de lucro, podrá ejercer como tal sino ha poseído o posee escalafón universitario y en consecuencia tener experiencia docente en universidades públicas nacionales.

6.- Los grados del escalafón de las universidades de iniciativa social sin fines de lucro serán iguales a las de las universidades nacionales; instructor en formación, instructor asistente, agregado, asociado y titular, teniendo que llenar igual número de requisitos para optar a estas categorías, así mismo se extenderán los grados al personal de empleados y obreros.

7.- En cumplimiento a lo anteriormente descrito se establecerá, transitoriamente en la reforma de la ley una inmovilidad de por lo menos dos años así mismo se designarán comisiones especiales por cátedra, departamentos, facultades, etc. de las universidades nacionales nombradas por el ministerio del poder popular para la educación superior que se conformarán en jurados evaluadores de cada profesor de las universidades de iniciativa social sin fines de lucro para determinar el lugar en el escalafón universitario al que correspondan y los requisitos a cumplir para ubicar o ubicarse en tal situación para esto se tendrá como base los requisitos exigidos en las universidades públicas nacionales; tiempo de servicio, trabajo de ascenso, curso de postgrados, doctorados, etc. lo que determinara en definitiva su ubicación.

8.- Estructurada la reforma de las universidades de iniciativa social sin fines de lucro los jurados para la evaluación de los trabajos de ascensos serán conformados por profesores de las universidades nacionales y se designarán por el ministerio de educación superior a través del consejo nacional de universidades. Lo anteriormente expuesto regirá también para los institutos universitarios y tecnológicos, máxime aún aquellos que otorgan o han otorgado títulos universitarios.

9.- El consejo nacional de universidades estará integrado por todos los rectores de las universidades públicas nacionales, quienes tendrán derecho a voz y voto, y de iniciativa social sin fines de lucro pero estas últimas solo tendrán derecho a voz, salvo una de ellas que tendrá derecho a voz y voto y que se designara de forma rotativa, a tal efecto se hará un



sorteo en el que se establecerá el orden de rotación el que será continuo y rotativo a cada reunión.

10.- A tal fin y bajo la supervisión del ministerio popular para la educación universitaria se reformarán los estatutos de creación de las universidades de iniciativa social sin fines de lucro para adecuarse a la presente reforma.

11.- Las universidades, colegios universitarios y tecnológicos de iniciativa social sin fines de lucro deberán elegir los cuerpos colegiados de las mismas así como a sus autoridades, quienes deberán poseer escalafón docente adquirido en las universidades públicas nacionales así como la experiencia docente requerida. Estas instituciones de iniciativa social sin fines de lucro deberán también organizar la representación estudiantil asociación de profesores, empleados y obreros.

Las Universidades Públicas Nacionales.

12.- Se eliminara la dicotomía de investigador y docente siendo estas actividades complementarias y obligatorias para todo profesor universitario, estando en consecuencia obligados a realizar un mínimo de un año de investigación por cada dos de docencia, para esto los departamentos organizarán directa o por intermedio de los centros o institutos de investigaciones las actividades de investigación correspondientes.

13.- En los casos de la actividad de investigación la reducción de la carga horaria de clases no podrá ser mayor en ningún caso del 50% de la carga horaria según la dedicación.

14.- Ninguna autoridad administrativa (autoridades universitarias: rectores, vicerrectores, decanos, directores, jefes de cátedra, etc.) podrán reducir la carga horaria de clases en mas de un 50% de la carga asignada a la dedicación, ni se podrán usar asistentes docentes o suplentes, la violación de esta disposición acarreará la destitución automática del profesor y la suspensión sin pago de sus actividades.

15.- Quedan expresamente prohibidas las actividades administrativas de cualquier índole que no sean las expresamente establecidas como de autoridad universitaria académica.

16.- Las actividades para universitarias no serán excusas ni causar para la reducción de la carga horaria que corresponda según la dedicación del profesor.

17.- Quien sin motivo justificado incurra en el incumplimiento de la carga horaria que le corresponda bien por inasistencias o por falta de asignación de la carga horaria de clases será suspendido automáticamente descontando la alicuota parte que corresponda a su incumplimiento y le será levantado el expediente de remoción correspondiente.

18.- En consecuencia se considerara como falta gravísima el incumplimiento de la actividad docente y de investigación (causal de remoción).

19.- El personal docente será identificado en las actividades universitarias, correspondencia y cualquier otra del protocolo universitario con la siguiente formula: 1ero. Título de grado que posea el profesor, ejemplo. Ingeniero: Químico, Mecánico Eléctrico, etc.; Abogado, Licenciado en Educación, Licenciado en Contaduría, Licenciado en Letras, etc. 2do. Inmediatamente su grado en el escalafón universitario: Profesor Instructor, Prof. Asistente, Prof. Agregado y Prof. Titular. El protocolo rezaría así: Ing. Mecánico, Luis Sandoval, Prof. Titular de la Universidad del Zulia.

20.- Para el personal administrativo y obrero se identifican con el título de pregrado, grado o postgrado que posea o en su defecto se utilizara el de señor o señora ciudadano.

El eufemismo de los Ingresos "Propios".

En la más aberrante de las prácticas neoliberales y procesos muy cuestionables de apropiación indebida se ha hecho universal en las universidades públicas nacionales el término de ingresos "propios" como



si estos fuesen generados de manera privada y/o personales, utilizándose de manera muy cuestionada.

No pueden considerarse "propios" ya que todos los bienes, recursos, equipos e instalaciones, así como el presupuesto que se utiliza para la generación de este presupuesto adicional (como será reconocido y llamado a partir de ahora) es propiedad del estado y en consecuencia del pueblo venezolano.

Este irrito fenómeno se explica históricamente dentro de la ideología neoliberal de mercado y apropiación de lo público, proceso durante el cual se privatizaron, despojando al pueblo de bienes muebles, inmuebles así como lucrativas empresas.

Pero la práctica más aberrante es la utilización que las respectivas autoridades dan a estos presupuestos adicionales gastándose o despilfarrándose en actividades que no son propias ni favorecen la actividad universitaria.

21.- En consecuencia los mal llamado ingresos "propios" definidos ahora como presupuestos adicionales solo podrán ser utilizados y destinados para servicios a los estudiantes (becas, transporte, comedores, etc.), para el mejoramiento de la infraestructura docente y edificaciones así como para el equipamiento de actividades de investigación y docencia deberán ser excluidas y prohibidas la utilización de adquisición de vehículos, gastos de representación, viáticos, pagos de asesores y cualquier otra actividad que no este directamente relacionada al servicio de los estudiantes de la docencia y la investigación. No podrá tampoco cubrirse gastos corrientes de los diferentes despachos, direcciones, decanatos, etc.

22.- Deberá reglamentarse y crearse el sistema de cuentas y depósitos de los recursos financieros del presupuesto ordinario extraordinario o adicionales, a tal efecto se creara una única cuenta de la universidad desde la cual se creara una cuenta por facultades y desde la cual se erogaran con las firmas correspondientes los gastos de cada estructura u ~~organización de las mismas, en consecuencia~~ los despachos vicerrectorales o institutos u organizaciones universitarias no poseerán cuentas bancarias propias, dependiendo de la cuenta única de la universidad.

23.- Queda expresamente prohibida la actividades paralelas de docencia o investigación que realizan los diferentes despachos rectorales teniéndose que realizar cualquiera de las iniciativas correspondientes a través de las organizaciones ya existentes de facultad, escuela, centros o institutos. Con esto se quiere poner fin a las actividades de docencia y extensión así como postgrados y cursos que los diferentes despachos realizan de manera paralela y en desmedro de los organismos naturales de universidad.

24.- Se creara la asamblea universitaria quien cumplirá las funciones del actual consejo universitario y que estará formado por cincuenta miembros integrado de la siguiente manera: 25 representantes de los profesores, los cuales se elegirán por voto directo y secreto de los mismos, 15 estudiantes, 6 empleados y 4 obreros, esta asamblea universitaria una vez instalada escogerá de su propio seno un presidente, dos vicepresidentes y un secretario, así mismo asistirá con derecho a voz y voto el rector de la universidad, así como los vicerrectores sin derecho a voto.

25.- El consejo universitario actual se reorganizara y solo tendrá funciones de carácter administrativo en cuanto a la organización y ejecución del presupuesto universitario y solo estará integrado por el rector, los vicerrectores y decanos.


26.- El patrimonio universitario en su mas amplia concepción no podrá ser alienado permutado cedido, vendido, arrendado o cualquier otra forma que implique enajenación del mismo sean estos bienes muebles o inmuebles. Cualquier violación a esta disposición podrá ser anulada retroactivamente a partir de la aprobación de la presente reforma y quienes hayan incurrido en dicha falta ser juzgado por los tribunales competentes.

27.- Las áreas o terrenos patrimonio de la universidad solo pueden ser usados para el desarrollo de actividades a fines a los objetivos docentes, científicos, culturales y deportivos de la universidad, cualquier construcción realizada por sector público o privado en áreas o terrenos de la universidad revertirán de manera expedita y perentoria a la administración y propiedad patrimonial de la universidad.

28.- Se establecerá como cupo mínimo aceptable para las universidades públicas nacionales un total de treinta estudiantes por profesor activo, en consecuencia si una universidad posee en sus diferentes modalidades



cuatro mil profesores este total se multiplicara por treinta arrojando ciento veinte mil estudiantes para esta universidad, a tal efecto se establecerán las formas de uso de las instalaciones así como su construcción y desarrollo. Sin que esto último sea excusa para el cumplimiento del cupo mínimo aceptable.

  
Dip. Roberto A. Quintero V.  
Presidente de la Subcomisión Permanente



Caracas, 9 de noviembre de 2010